

Asociación Uruguaya de Historia Económica (AUDHE)
Terceras Jornadas de Historia Económica
Montevideo, 9 al 11 de julio de 2003

Simposio N° 12: FRONTERAS, SOCIEDAD RURAL Y PROCESOS DE CONSTRUCCIÓN ESTATAL EN EL RÍO DE LA PLATA HASTA MEDIADOS DEL SIGLO XIX.

Coordinadores: Ana Frega y Ariadna Islas

Título de la ponencia: “La construcción del poder estatal en una sociedad rural en expansión: el acceso a la justicia civil en la campaña bonaerense (1800-1834)”

Autor(es): María E. Barral (CONICET/UNLu); Raúl O. Fradkin (UNLu/Instituto Ravignani-UBA); Marcelo Luna (UNLu); Silvina Peicoff (UNLu); Nidia Robles (UNLu)

Correo electrónico:

María E. Barral: mebarral@yahoo.com

Raúl Fradkin: rfradkin@laboheme.com.ar

Marcelo Luna: luna@icarodigital.com.ar

Silvina Peicoff: silvinapeicoff@uol.com.ar

Nidia Robles: roblesnidia@hotmail.com

Introducción

Esta ponencia forma parte de una investigación más amplia destinada a analizar a través de las fuentes judiciales el desarrollo de la conflictividad social rural en la campaña bonaerense entre las décadas de 1780 y 1830¹. El uso adecuado de estas fuentes requiere de un análisis cuidadoso no sólo de sus condiciones de producción y conservación sino también de su representatividad temporal y espacial. Es por ello que en esta presentación nos proponemos ofrecer los primeros resultados de un análisis sistemático que hemos realizado del fondo Tribunal Civil que se conserva en el Archivo General de la Nación.

La elección de esta serie documental encuentra dos fundamentos principales. Por un lado, los estudios de historia social centrados en fuentes judiciales han privilegiado generalmente las causas criminales y son escasos los que han considerado las posibilidades de los juicios de naturaleza civil. Por otro, porque nos permite considerar uno de los mecanismos mediante los cuales los conflictos entre particulares se fueron canalizando y resolviendo a través de una instancia de mediación estatal, como fue la justicia civil de primera instancia instaurada a partir de la reforma de 1821. En consecuencia, a través de un enfoque básicamente cuantitativo intentaremos observar el acceso a esta instancia de la actividad estatal y verificar sus diferencias regionales de ritmo y profundidad. De este modo, tendremos una mirada más precisa de uno de los procesos claves en la construcción del poder estatal en el mundo rural, de sus alcances y limitaciones.

Para ello fue necesario adoptar un enfoque metodológico lo suficientemente flexible que nos permitiera dar cuenta de estas diferencias regionales y de allí que hayamos trabajado con más de una forma de regionalización. En primer término, hemos hecho una distinción entre los pleitos de la ciudad y los de la campaña. En segundo término, como nuestro interés estaba puesto sobre todo en el mundo rural, ensayamos dos acercamientos distintos: el primero distingue cinco zonas fijas para todo el período atendiendo a la evolución anual y por quinquenios de la litigiosidad judicial que tuvo cada una; el segundo acercamiento, por su parte, distingue cuatro regiones de composición variable en función de evaluar su relación con la expansión de la frontera para lo cual se han comparado dos etapas separadas por el año 1815. Ambos acercamientos - que remiten a la convencionalidad de toda pauta para zonificar y periodizar procesos- buscan estimar de qué manera se despliega en la sociedad rural bonaerense una «frontera judicial», de irregular intensidad, como vía de canalización de la conflictividad entre los actores. En último término, hemos tratado de determinar los ejes en torno a los cuales se estructuró esta litigiosidad y para ello hemos discriminado diez categorías, cada una de las cuales reúne un tipo de causa judicial y oportunamente analizaremos las cuatro más relevantes.

La opción por esta serie documental condicionó la elección del punto de partida que debió ser fijado a partir del año 1800 pues es cuando ella adquiere consistencia. La elección del punto de llegada, en cambio, ha sido establecido por nosotros considerando que en torno a 1834 pues consideramos que por entonces ya se han consolidado las principales transformaciones que signaron el período. En primer lugar, las transformaciones demográficas dado que en estas décadas la campaña bonaerense vivió un acelerado proceso de poblamiento y extensión del área ocupada por la sociedad criolla inscripto en una compleja y cambiante trama de relaciones interétnicas. Como resultado, la población rural creció a un ritmo aún mayor que la urbana y en la década

¹ Agradecemos la valiosa colaboración de Marcelo Ferreyra en la recolección de la información que hizo posible este trabajo.

de 1830 llegó a superarla mientras el área ocupada se expandía notablemente, creciendo unas seis veces entre 1780 y 1833 (hasta alcanzar unos 180.000 km²) mientras la población rural lo hizo unas siete veces, adquiriendo una magnitud superior a las 90.000 personas (Garavaglia, 1997; Moreno y Mateo, 1997). En segundo lugar, se produjo una transformación de la estructura económica y social agraria que convirtió a los bienes pecuarios en los principales productos exportables y a la campaña bonaerense en su principal área productiva; ello implicó una progresiva valorización de los recursos y una creciente afirmación de la propiedad privada que venía a cuestionar costumbres arraigadas. En tercer término, se operaron decisivas transformaciones en la organización institucional y en la construcción de un nuevo tipo de estado - el estado provincial- de modo que la década de 1830 puede ser vista como el momento de consolidación del control de la campaña por parte de este estado que para entonces consolidó la expansión y el control de sus fronteras (Ratto, 1996) y la estructura político-judicial basaba en los juzgados de paz y su definitivo ejercicio de las funciones de policía rural (Díaz, 1959; Garavaglia, 1999a; Gelman, 2000).

El fondo documental analizado nos permite enfocar este vertiginoso período en forma continua. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que reúne expedientes que provienen de dos experiencias judiciales muy distintas. Hasta 1821, los expedientes provienen de la justicia capitular de Buenos Aires y en menor proporción de la Villa de Luján. Se trata de un ámbito judicial en el cual los “jueces” eran los Alcaldes Ordinarios quienes podían tener más o menos formación jurídica pero que generalmente eran legos y no eran funcionarios rentados y de carrera. Por el contrario, a partir de 1822 la serie documental se integra con los expedientes provenientes de la Justicia de Primera Instancia, integrada por funcionarios rentados y con formación jurídica, es decir, por jueces en el sentido moderno del término. En cuanto a los juicios de la campaña hay que tener en cuenta que sólo durante tres años (1822 a 1824) los pleitos debieron tramitarse ante los tres jueces que en ella residían y que encabezaban los tres departamentos judiciales: el primero con sede en San Nicolás y luego en Arrecifes; el segundo en la Villa de Luján; y el tercero en San Vicente y Chascomús después. A partir de 1825 esta situación fue modificada sustancialmente pues la justicia de primera instancia quedó circunscripta a cuatro jueces con sede en la ciudad, de los cuales dos se ocuparon del fuero civil y dos del criminal. Es decir que recién por entonces tenemos una clara delimitación de ambos fueros². En estas condiciones, es posible suponer que la serie documental que analizamos puede ser más representativa para los años 1825/34 que para el cuarto de siglo anterior y que una parte por ahora imposible de determinar de juicios civiles se encuentren dispersos en otros fondos documentales.

Pese a ello, los datos pueden ser de utilidad en la medida de que no se han realizado estudios sistemáticos acerca de la práctica judicial efectivamente desplegada. Obviamente en ellos sólo están presentes algunas de las causas que se resolvieron ante Alcaldes de Hermandad y los Jueces de Paz dado que sus sentencias eran apelables ante los Alcaldes Ordinarios primero y los Jueces de Primera Instancia posteriormente. A diferencia de la justicia oral que impartían estos vecinos legos sin remuneración, la justicia de primera instancia era ejercida por funcionarios del estado; de este modo, no se trataba ya de una instancia de mediación y arbitraje oral tramitada entre vecinos y ante una autoridad del mismo origen, sino de una instancia escrita donde quien cumplía la función de arbitraje y mediación era un funcionario estatal, remunerado y letrado, y

² En rigor esta delimitación había comenzado a producirse antes dentro del esquema de la justicia capitular: ya por la ley del 22/12/1820 funcionaron un juzgado civil constituido por el Alcalde de primer voto y uno criminal a cargo de dos Alcaldes de segundo voto. Cf. Ibañez Frocham (1938), Zorroaquin Becú (1952), Barreneche (2001)

que intervenía a partir de un saber profesional específico. De esta manera, podemos considerarla como una evidencia firme y observable de un proceso mucho más vasto y opaco: uno de los modos en que el estado comenzaba a penetrar en la vida social. En otros términos, el acceso a este nivel judicial por los vecinos implicaba que ellos estaban resolviendo sus conflictos de un nuevo modo y recurriendo a otro tipo de recursos y saberes. Como ha sido advertido, el acceso a la justicia en calidad demandante era un atributo específico de la vecindad, una categoría sociojurídica que estaba sufriendo intensas mutaciones en el período (Cansanello, 2001; Herzog, 2000).

1. Las causas civiles entre 1800 y 1834.

Nuestro análisis no contiene la totalidad de los juicios encontrados en el fondo del Tribunal Civil pues sólo hemos incluido aquellos que corresponden a Buenos Aires y que se tramitaron entre 1800 y 1834³. Nuestros datos provienen entonces de 4906 expedientes pero en la **Tabla 1** trabajamos con 4896 expedientes dado que para 10 no ha sido posible fijar la fecha de inicio con exactitud. Al resto de los juicios, aunque tuvieron muy diferentes duraciones, hemos optado por ubicarlos cronológicamente sobre la base del año de inicio del pleito.

De este modo tenemos un promedio anual de 140,1 juicios. Lo importante es que la **Tabla 1** nos muestra que todos los años anteriores a 1820 estuvieron por debajo de este promedio y pone en evidencia el sustancial incremento que se produjo desde la reforma judicial de 1821. Sin embargo, también permite observar que esa tendencia creciente había comenzado poco antes (hacia 1818) aunque en forma menos pronunciada, y parece haberse interrumpido momentáneamente con la crisis de 1820. A partir de 1821, entonces, la serie evidencia una clara tendencia ascendente que llega a un punto decisivo en 1828, para luego tener una evolución muy oscilante y alcanzar en 1834 el máximo número de juicios por año. Dicho en otros términos, la evidencia es bastante clara en cuanto a que las crisis políticas redujeron el acceso a la justicia pero no hicieron colapsar el funcionamiento del sistema judicial ni en 1820 ni en 1829, aunque es por demás evidente que la segunda crisis tuvo efectos mucho mayores, sobre todo en la campaña donde se produjo una reducción del 50% respecto del año anterior.

Si se observa el **Gráfico A** se puede advertir que la evolución ofrece la imagen de una escalera: durante la década de 1800 y hasta fines de la siguiente los juicios por año no superaron la centena. A partir de entonces – y con la oscilación ya mencionada- se operó un cambio de rango y el número de juicios superó la centena. En muy poco tiempo, se produjo un nuevo salto: desde 1823 los juicios anuales no bajaron nunca de los dos centenares y desde 1828 - aunque sin posibilidad de estabilización- pudieron superar los tres centenares. En consecuencia, lo que queda fuera de dudas es el éxito perdurable de la reforma judicial de 1821 y una tendencia franca y creciente al incremento de la litigiosidad judicial.

Otro aspecto de esta evolución era previsible: el movimiento de la curva general estuvo determinado por el movimiento de la curva ciudad. Es decir, que en casi todo el período la justicia civil de primera instancia fue en gran medida urbana. De este modo, las causas de la ciudad fueron un 73% del total y nunca bajaron del 62% (a mediados de la década de 1820) y hasta llegaron a ser del 80 al 90% (como en la primera década del

³ De este modo han sido dejados fuera de consideración los 4 expedientes anteriores a 1800 y los 109 correspondientes a otros lugares. Estos 113 expedientes no considerados representan poco más del 2% del total de nuestro conjunto de fuentes definitivo. También merece destacarse que se unificaron los lugares de los hechos que se juzgaban considerando su pertenencia a lugar más cercano que fuera partido en 1838. Por ejemplo: cuando un juicio era en Arroyo del Medio o Ramallo se lo incluyó en San Nicolás; si era en Zarate o Campana en Exaltación de la Cruz, etc.

siglo XIX). Pese a esta neta primacía urbana en la justicia civil la relación entre ciudad y campaña no fue siempre igual y pueden verse dos coyunturas notables e inversas: entre 1824 y 1828 las causas en la ciudad decayeron en términos absolutos y mientras subían en la campaña; y a partir de 1829 las causas de la campaña decrecen o se estancan mientras las de la ciudad seguían creciendo. De este modo podemos pensar que la reforma judicial de 1821 fue inicialmente exitosa en cuanto a su propósito de canalizar judicialmente los conflictos rurales y ello se mantuvo por algunos años más, pese a la decisión de trasladar a la ciudad las sedes de los juzgados rurales de primera instancia en 1824; pero esta situación no pudo consolidarse plenamente.

En este punto hay otra cuestión importante: la evolución de la litigiosidad judicial no siguió la que tuvo la población. Por el contrario, mientras la población rural estaba creciendo más rápido que la rural hasta terminar por predominar en el conjunto provincial ello estuvo lejos de manifestarse en la evolución de la litigiosidad judicial. En consecuencia, puede inferirse que en la práctica efectiva esa población rural cada vez más numerosa tuvo a los Jueces de Paz como ámbito jurisdiccional por excelencia, un ámbito que resultaba ser era así mucho mayor de lo que establecían las normas y pese a que el proceso inflacionario estaba licuando el límite de 300 pesos para las causas que debían atender, un fenómeno que ya había sido advertido (Robles, 2001) y que ahora podemos confirmar.

2. Las causas civiles por zonas

Podemos analizar también la distribución de estas causas para distintas zonas de la campaña. Para ello hemos procedido a ubicar el lugar de origen de cada juicio. Cada uno de estos lugares fue situado en el partido correspondiente a los que existían hacia el año 1838 y procedimos luego a agrupar a estos partidos en alguna de las siguientes zonas: Cercana, Norte, Oeste, Sur 1 y Sur 2. Esta regionalización – como todas las que hacemos en historia- es una convención y una hipótesis de trabajo⁴. En esta oportunidad ella busca tener en cuenta las características productivas de las distintas zonas de la campaña y las diferencias en el proceso de ocupación pero también respetar los criterios que se emplearon en la época para organizar la actividad judicial. En este sentido, hemos tratado de mantener tanto la unidad de la jurisdicción que llegó a tener el Cabildo de Luján como la demarcación en departamentos judiciales establecida en el decreto del 28 de diciembre de 1821 y sus modificaciones posteriores, cuando Morón, Matanza y Quilmes fueron también incluidos dentro de la jurisdicción de la ciudad. Sólo cabe destacar una salvedad: aunque no era un partido, hemos procedido considerar los litigios que se entablaron en el ejido de la Ciudad como parte de la campaña Cercana.

La **Tabla 2** nos ofrece los resultados de esta clasificación regional para las 1265 causas de campaña cuya ubicación precisa ha podido establecerse. Como era previsible la mayor parte de estas causas provienen de la campaña cercana. Sin embargo, también se destaca la campaña Oeste que cobra ahora una importancia mayor a la esperada⁵.

⁴ En consecuencia, la composición de las regiones que hemos delimitado difiere con la que han elaborado otros autores: Garavaglia (1999b), Gelman y Santilli (2000), Mateo (2001), Robles (2001). De esta manera contamos con una campaña **norte** (San Nicolás de los Arroyos, Arrecifes, Baradero, Pergamino, Rojas, Salto, San Pedro); **oeste** (San Antonio de Areco, Fortín de Areco, San Andrés de Giles, Exaltación de la Cruz, Luján, Pilar, Guardia de Luján, Navarro y Lobos); **cercana** (antiguo ejido de la ciudad, Morón, Quilmes, Matanza, Flores, Las Conchas, San Fernando, San Isidro), **sur 1** (Cañuelas, San Vicente, Ensenada, Magdalena, Chascomús, Ranchos, Monte) y **sur 2** (Dolores, Monsalvo, Azul, Tapalqué, Fuerte Independencia, Bahía Blanca y Carmen de Patagones).

⁵ Las diferencias con los datos aportados por Robles (2001) que trabajó el período 1825/34 provienen de las diferencias en la regionalización, especialmente al haber incluido en este trabajo a Pilar en la campaña oeste y no en la cercana.

También resulta llamativa la mayor incidencia del Sur 1 con relación al Norte, de más antigua colonización. En otros términos, lo primero que esta información indica es que el acceso a la justicia civil estuvo muy diferenciado regionalmente y ello haría suponer grados muy distintos de penetración estatal en la vida rural, al menos por este medio.

Sin embargo, esta mirada es muy estática. Como puede observarse en el **Gráfico B** las dos principales regiones (Cercana y Oeste) tuvieron una evolución básicamente análoga aunque ofrecen algunas diferencias sugerentes. La campaña Oeste parece haber reaccionado más rápidamente a los efectos de la reforma judicial de 1821 que el área inmediata a la ciudad. Quizás ello sea menos sorprendente de lo que en principio pudiera parecer: se trata del área rural que tenía una arraigada tradición de acceso a la justicia por la existencia del Cabildo de Luján y la Villa, inmediatamente después de su disolución, se convirtió en cabecera de un departamento judicial hasta 1824. Pero que esta tradición no fue suficiente lo muestra que luego el Oeste no logró consolidar su participación en el total y sufrió una caída mucho más fuerte, mientras que la curva de la campaña Cercana se comporta de modo más parecido a la de la ciudad. En ello sin duda ha de influir que algunos de estos partidos habían pasado a depender antes de 1825 a la jurisdicción de los jueces de primera instancia de la ciudad. Lo cierto es que la crisis de 1829 afectó a ambas zonas aunque en el Oeste casi llevó al colapso a la serie. Por su parte, el **Gráfico C** nos muestra que la primacía del Sur 1 frente al Norte en el total deviene de una coyuntura muy precisa (los años 1824-28) y estuvo lejos de ser un rasgo permanente; por eso, la diferencia no debe ser exagerada.

El **Gráfico D**, presenta los mismos datos pero en promedios anuales por quinquenio. Ello permite advertir mejor las tendencias: el Oeste, que al comenzar la década de 1820 tenía un comportamiento tan diferente del Sur y del Norte, termina evidenciando las mismas tendencias al final del período. De esta forma, el resultado es bastante claro. La justicia civil terminó siendo mucho más accesible para los vecinos de la campaña Cercana que conformaba junto a la Ciudad un área de mayor acceso a la justicia civil. Dentro de una tendencia general al incremento de juicios en todo el ámbito rural ella termina por ser más firme y sólida sólo en el área más cercana a la ciudad aunque esta primacía tan neta no fue un rasgo estable y permanente sino que sólo proviene de los últimos años del período. De esta manera, el resultado final es en cierto sentido paradójico. Pese al aumento general de los juicios civiles y la incorporación de la campaña al acceso a la justicia letrada, el final del período se parece mucho a sus comienzos: una neta primacía de la ciudad y una implantación firme sólo en la campaña cercana. En ella los jueces de paz tendrán sin duda un rol destacado pero estaban bajo una supervisión más firme de los de primera instancia. En el resto de la campaña fueron “las justicias” por excelencia. Medido a través de este indicador, la reforma judicial de 1821 fue mucho menos exitosa en su propósito de implantar un régimen de justicia letrada para la campaña de lo que parecía en sus comienzos.

La **Tabla 3** nos puede ayudar a precisar estos datos. Dado que no disponemos de datos fidedignos de población para todos los años hemos optado por estimar la distribución proporcional de la población en las distintas zonas tomando en cuenta los datos de los padrones de 1813/15, de 1822 y de 1836⁶ y considerarla representativa de la situación en tres quinquenios. Para cada uno de ellos hemos considerado el total de juicios producido y estimado su distribución proporcional por zona. Como puede observarse,

⁶ Agradecemos a José Mateo habernos suministrado esta información. Un excelente análisis de la evolución demográfica rural en la primera mitad del siglo XIX en Mateo (2001), capítulo 2.

hay tres zonas que siempre han estado subrepresentadas en la muestra de juicios en relación con su incidencia en la población: el Norte, el Sur 2 y el Sur 1, aunque ésta en el último quinquenio, prácticamente tiene la misma incidencia en las dos variables. Por contrapartida, la campaña Cercana siempre presenta una participación mayor en los juicios que en la población. A su vez, la que tiene un comportamiento más errático es la campaña Oeste que en el segundo quinquenio (1820/24) tuvo una incidencia en el total de juicios muy superior a la que tenía en la población. De este modo, se confirman las impresiones anteriores. El acceso a la justicia presenta diferencias regionales notables y ha sido extremadamente más factible para la campaña Cercana que para el resto del mundo rural y es notoria que la distribución del primer y tercer quinquenio es sustancialmente análoga. Ello sólo fue diferente en algunos años de la década de 1820 cuando el incremento de la litigiosidad judicial en el Oeste fue mucho más acentuado que en el resto de la campaña, aunque la proporción de población que contenía era menor que 10 años antes.

3. Otra forma de regionalización y de periodización

Aunque hemos tratado de otorgar dinamismo a nuestro análisis lo cierto es que la regionalización con que hasta ahora hemos operado es sustancialmente estática, distribuyendo los partidos existentes en 1838 en cinco zonas de composición fija. Intentaremos ensayar una perspectiva más dinámica modificando tanto el criterio de regionalización como el de periodización. Nuestro interés aquí es evaluar el acceso a la justicia en función de la presencia de la frontera y su movimiento expansivo. Los resultados pueden verse en la **Tabla 4** y en el **Gráfico E** donde puede observarse la distribución del total de causas en cuatro nuevas regiones que hemos denominado: Ciudad, Campaña Cercana, Campaña Intermedia y Frontera. Obviamente, sobre la base de este criterio organizador la primera y la segunda región se distinguen sustancialmente de las otras pues en ellas la composición se mantiene inalterable para las dos etapas y repite la anterior regionalización por lo que hemos optado por designarlas del mismo modo. En cambio, en las otras dos regiones que ahora discriminamos – campaña intermedia y frontera- hemos dispuesto una composición variable que difiere en ambas etapas.

Cabe aclarar que el total de casos analizados no corresponde con las 4906 causas de la muestra pues deben descontarse 77 expedientes para los cuales desconocemos el lugar y/o el año preciso del juicio. La primera de las etapas comprende los años 1800 a 1815, y la segunda el período que va desde 1816 hasta 1834. Esta delimitación temporal intenta ser lo menos convencional posible – aunque ello es completamente inevitable –; por ello, no sólo responde a dividir el período completo en otros dos de similar duración, sino que se ha tenido en cuenta que hacia 1815 se produce la expansión de la frontera más allá del río Salado mientras comienza a operarse una valorización del ganado por el incremento de la exportación de productos pecuarios (Garavaglia, 1999b; Rosal y Schmit, 1999). En otros términos, quisimos construir un tipo de regionalización que diera cuenta de la dinámica de la población y de la ocupación del territorio a lo largo del período. De este modo los partidos de la Campaña Intermedia de la primera etapa son aquellos que estaban ubicados entre la campaña cercana y los que integraban la “frontera” hasta 1815; luego de esta fecha algunos de estos últimos partidos pasarán a formar parte de la Campaña Intermedia” de la segunda etapa y la Frontera se compondrá de nuevos partidos en función del proceso de expansión de la misma que tuvo lugar en estos años.

Pese al margen de arbitrariedad que puede presentar esta manipulación de los datos y a pesar de que sus resultados no alteran el trazo grueso del cuadro de situación,

igualmente conviene presentarlos pues nos puede ayudar a precisar algunos cambios. En la primera etapa vemos un predominio absoluto de la Ciudad con un 79% del total de expedientes (715); la Campaña Intermedia⁷ representa en esta etapa el 10% de las causas (89); en la Campaña Cercana⁸ se iniciaron el 9% de las causas (84), mientras que los partidos de Frontera⁹ representan sólo el 2% de los juicios (16). En la segunda etapa, si bien la Ciudad continúa predominando, su incidencia se ha reducido al 73% (2851), mientras que la Campaña Intermedia¹⁰ asciende al 17% (670). La Campaña Cercana, si bien aumenta en casi cuatro veces y media la cantidad absoluta de causas, que pasan a ser 364, mantiene inalterado su porcentaje en el total de juicios, al tiempo que la Frontera¹¹ aumenta el número absoluto de causas 2 veces y media, pero disminuye su incidencia en el total de expedientes al 1% (40).

¿Qué nos muestra esta comparación entre las dos etapas? Ante todo, que los juicios de la Ciudad, pese a su crecimiento notable ya que prácticamente se cuadruplican y a que en ningún momento perdieron su primacía, tienden a tener una disminución de su incidencia relativa. A su vez, en ambas etapas el acceso a este nivel judicial por parte de los vecinos que en cada una habitan los partidos ubicados en la frontera fue prácticamente inexistente e incluso su incidencia fue aún menor en la segunda que en la primera etapa¹². En consecuencia, no parece descabellado conjeturar que los litigios judiciales de los partidos de frontera eran canalizados por los Jueces de Paz cuando no directamente por los comandantes militares. Dicho en otros términos, la imagen clásica de un mundo rural en el cual la autoridad por excelencia eran los Jueces de paz parece corresponder fehacientemente a la frontera. Pero esta imagen tiende a diluirse si enfocamos el cambio que se ha operado (pero que no llega a alterar la configuración del cuadro general): se ha producido un importante incremento de la participación de los partidos que hemos incluido en la Campaña Intermedia, muchos de los cuales eran partidos de frontera hasta 1815 y han dejado de serlo. Podemos conjeturar, entonces, que el desarrollo de esta capacidad de intervención estatal que evidencia la serie de juicios civiles se construyó en función directa al grado de consolidación de la colonización. En definitiva, mientras el total de las causas de la Campaña Cercana se cuadruplicó entre una y otra etapa (a un ritmo general que es sólo unas décimas superior al de la Ciudad y que sigue el ritmo general de la serie), las causas rurales llegaron a sextuplicarse. Pero fue en la Campaña Intermedia donde ese incremento ha sido a un ritmo mayor ya que su número se acrecentó casi ocho veces. El contraste de esta situación con las áreas de frontera es notable, pues en ellas las causas de la segunda etapa son sólo dos veces mayores. En otros términos, pareciera que estamos asistiendo a una auténtica expansión de lo que podríamos denominar como una “frontera judicial”, un fenómeno en cierto modo análogo al que se ha detectado para la participación electoral aunque en este caso fueron notables los efectos de la inclusión de los vecinos de la frontera sur (Ternavasio, 1995). En los partidos fronterizos, la expansión de la

⁷ Compuesta por los partidos de San Nicolás, Arrecifes, Baradero, San Pedro, San Antonio de Areco, San Andrés de Giles, Exaltación de la Cruz, Luján, Pilar, Cañuelas, San Vicente, Ensenada y Magdalena

⁸ Que comprende el Ejido y los partidos de Morón, Quilmes, Matanza, San José de Flores, Las Conchas, San Fernando y San Isidro

⁹ Hasta 1815: Pergamino, Salto, Guardia de Luján, Chascomús, Rojas, Fortín de Areco, Navarro, Lobos, Monte y Ranchos

¹⁰ En esta etapa se suman a los anteriores los siguientes partidos: Rojas, Fortín de Areco, Navarro, Lobos, Monte, Ranchos, Pergamino, Salto, Guardia de Luján, Chascomús.

¹¹ Integrada en esta segunda etapa por los partidos de Dolores, Monsalvo, Azul, Tapalqué, Fuerte Independencia, Bahía Blanca y Carmen de Patagones.

¹² Ello probablemente obedezca al hecho que nuestro análisis se detuvo en 1834 en pleno momento de expansión de la frontera

acción estatal no parece haberse apoyado en estos mecanismos judiciales. Y parece conveniente eludir correlaciones simples: que ello, no fue resultado exclusivo del carácter reciente de estos partidos lo expresa el caso notable de Carmen de Patagones, un pueblo que habiendo sido fundado en 1779, en estos 35 años no ha tramitado ningún juicio ante la justicia civil.

4. Un análisis al nivel de los partidos

Conviene reducir la escala de análisis para tratar de indagar lo que puede estar escondiéndose detrás de estas dos formas de regionalización y observar esta misma evidencia al nivel de los partidos. La **Tabla 5** muestra que la media de causas judiciales por partido gira en torno a las 33: dos partidos se encuentran exactamente en ese nivel, 22 se ubican por debajo y 14 la superan. Ahora bien, si observamos los partidos que superan la media de 33 por zonas podremos registrar que: en el Norte sólo hallamos 1 sobre 7 partidos que la componen; en el Oeste tenemos 5 sobre nueve partidos; en la campaña Cercana también son 5 sobre 8 “partidos”; en el Sur 1 tenemos 3 sobre 7; y en el Sur 2, ninguno. En otros términos si el acceso a la justicia civil ofrecía la evidencia de fuertes diferencias regionales ahora podemos observar que además había también una fuerte diferenciación dentro de cada una de las zonas.

De esta manera, los partidos que tienen una participación más destacada fueron Quilmes (110), Luján (99), San Isidro (89) y Magdalena (74) que en conjunto concentraron el 30% de las causas de toda la campaña. Conviene recordar que de dos de ellos pertenecen a la Campaña Cercana, uno a la Oeste y uno a la Sur 1; de modo que entre ellos no hay partidos del Norte y del Sur 2. En otros términos, al nivel de los partidos tenemos una situación que replica la que hemos descripto entre las distintas zonas de la campaña pero al mismo tiempo nos muestra que algunos partidos fueron especialmente sensibles al acceso a la justicia.

El **Gráfico F** permite observar que esta situación con claridad. Nos advierte que fue en el Oeste donde se presenta la mayor distancia entre el primero y el segundo partido ordenados según el número de causas que originaron. Si de concentración se trata, la mayor es evidente que se operó en el Sur 2 donde Monsalvo y Dolores sumaron el 47 y 43%, respectivamente, de la zona, pero sus magnitudes absolutas fueron tan reducidas (un total de 36 juicios) que la información está claramente sesgada. Vemos así que si en el Oeste se opera la mayor concentración (ya que Luján prácticamente duplica al segundo), en el Sur 1 encontramos una distribución bastante más equitativa entre 3 partidos.

Esta constatación no permite todavía formular una explicación consistente de las diferencias entre partidos de una misma zona. Pero lo que cabe advertir es que este desigual acceso a la justicia civil de primera instancia no parece tener relación con las diferencias que presentaba el crecimiento de la población. Unos pocos ejemplos lo podrán indicar con claridad. Si comparamos el lugar que ocupan los partidos en la serie con el que tuvieron en la distribución de la población hacia 1838 puede observarse que Quilmes, el partido que ocupa la primera posición en el número de juicios era sólo el tercer partido más poblado en 1838 y que Luján, que ocupa el segundo rango en nuestra serie se situaba en la sexta posición en el ordenamiento según el tamaño de su población. Más aún, si nuestro análisis se reduce a la segunda etapa (1816-34) ello todavía se hace más evidente: en este caso podemos ver que la Guardia de Luján que era el partido más poblado en 1838 se ubica en la posición número 12 en nuestra serie de juicios para esa etapa y San Nicolás que era el segundo partido con mayor población ese año se ubica en la posición número 10 en la distribución de juicios de esa etapa. Es decir que el acceso a la justicia no sólo era muy desigual regionalmente y aún lo era entre

partidos de la misma zona; además podemos percibir que la extensión de la litigiosidad judicial no respondía directamente al incremento de la población de modo que hubo zonas rurales que pese a estar pobladas desde hacía muchos años y algunos de los cuales ni siquiera se situaban en la frontera tuvieron un acceso muy reducido y muy inferior al que podría esperarse considerando la magnitud de su población. Dicho de otro modo, partidos más poblados que otros evidencian una acceso a este nivel judicial muy dificultoso.

Todavía no nos es posible formular una explicación satisfactoria de estas fuertes diferencias. Pero, además, estos mismos datos nos plantean un interrogante: ¿qué cambios hubo entre la primera y la segunda etapa cuando observamos la evidencia al nivel de los partidos? Aunque el número de causas rurales producidas entre 1800 y 1815 fue reducido cabe destacar que el primer lugar lo ocupaba Las Conchas, el segundo era compartido por Luján y Magdalena y el tercero por San Isidro. Entre 1816 y 1834, en cambio, el primer lugar correspondió a Quilmes, el segundo a Luján, el tercero a San Isidro y el cuarto a Chascomús. Lo más destacado, en consecuencia, es el notable incremento de los juicios de Quilmes (dónde en la segunda etapa presenta un número de causas 14 veces más alto que en la primera) y la perduración de Luján y San Isidro como dos partidos con un peso decisivo (aunque sólo han cuadruplicado el número de juicios). Vemos entonces que las fuertes diferencias entre los partidos no sólo son de magnitud sino también y muy notablemente evidente en el ritmo de incremento de la litigiosidad judicial.

5. Las causas civiles por categorías

¿Qué tipo de conflictos se canalizaron ante la justicia civil? Conviene recordar que a esta instancia judicial se debía recurrir cuando se vieran involucradas sumas superiores a los 300 pesos y las causas vinculadas a los trámites sucesorios. Pero su vastedad era mucho mayor. Para poder dar cuenta de esa variedad y al mismo tiempo tornar manejable el cúmulo de información reunida hemos construido diez categorías o tipos de causas para el análisis de los 4834 expedientes. Ellas son: 1) Deudas¹³. 2) Familia¹⁴. 3) Tierras¹⁵. 4) Ganado¹⁶. 5) Daños¹⁷. 6) Propiedades urbanas (en adelante PU)¹⁸. 7) Autoridades¹⁹. 8) Tramitación²⁰. 9) Otros²¹. 10) “Sin datos/causa”²².

¹³ Incluye aquellos juicios entablados por específicamente por deudas (Cobro de pesos, cobro, cancelación, intereses, cuenta y compensación de un crédito, letras, débito) comerciales, por préstamos, por administración de compañías o rendición de cuentas, por capellanías, por devolución de bienes (que no sean ganado o tierras), pero también por manejo de pulperías, cobro de honorarios o salarios, cumplimiento de trabajos contratados o deudas por compras efectuadas de trigo, cebada, etc.

¹⁴ Incluye los juicios por bigamia, divorcio, separación de bienes, alimentos, esponsales, herencia, malos tratos, tenencia de menores, nombramiento de tutores y curadores y otros.

¹⁵ Incluye los juicios por administración de establecimientos agropecuarios, cobro o incumplimiento de contratos de arrendamiento, juicios por títulos de propiedad, desalojo, deudas por operaciones de comparaventa de tierras, deslindes y mensuras.

¹⁶ Incluye juicios por deudas de ganado, propiedad de ganado y cueros, robo y venta.

¹⁷ Daños de sementeras, montes, perjuicios, desfalco, injurias, rotura de paredes, etc.

¹⁸ Incluye todos los juicios en los que hubieran visto involucrados casas y solares en la ciudad y en los pueblos de la campaña como conflictos por pago de alquileres, desalojos, deslindes, mensuras, apertura de calles o zanjas, títulos de propiedad, operaciones de compra-venta, etc..

¹⁹ Incluye las causas judiciales en las que se cuestiona el desempeño de autoridades locales por abuso de autoridad o despojo y aquellas en las que se desafía o desconoce a las mismas autoridades.

²⁰ Incluye expedientes destinados a solicitar alguna tramitación judicial sin especificar la causa del juicio: protocolización de documentos, concurso de bienes, solicitud de copias, información, certificación, apelación recusación, costas, solicitud de venia, nulidad, tasación, escrituración, ejecución.

²¹ Incluye contratos de aprendizaje, solicitud o venta de esclavos, compra de libertad, carta de ciudadanía, remate, donaciones, liquidación de un contrato.

La **Tabla 6** nos muestra, ante todo, el notable peso de las causas por Deudas que resultan ser un 44% del total. Estos juicios por Deudas, pese a su variedad, tienen un objeto contencioso preciso: los juicios por “cobro de pesos” que representan el 84% de ellos. Muy lejos se ubican todas las demás categorías. En un segundo nivel tenemos las causas por Propiedades urbanas (12%), Tramitación (12%), Familia (10%) y Tierras (8%).

En un primer acercamiento este patrón de distribución permite constatar algunas cuestiones que son, en realidad, obvias. El es congruente con una instancia judicial en la que tiene un peso decisivo la ciudad y evidencia que la justicia civil fue empleada para litigar en cuestiones que hacían al derecho de propiedad dado que prácticamente todas las categorías refieren a este ámbito de disputa. En consecuencia, la serie expresa ante todo y sobre todo, los litigios entre los sectores propietarios que se ven así sobre representados, aunque es bueno recordar la extrema variedad y laxitud de esta condición en una sociedad como la bonaerense.

Ello se confirma plenamente si desagregamos dos categorías. En los juicios incluidos en la categoría Tierras, un 44% se relacionan con disputas por la propiedad, un 22% por desalojos y un 20% por mensuras en cuestión. Por su parte, los juicios que agrupamos en la categoría Familia incluyen disputas por tenencias de menores (37%), por cuestiones de herencia (27%) y en tercer término por divorcio (26%). Por último, los juicios que encuadramos en la categorías Ganado son ante todo juicios por deudas de ganado (37%) y por la propiedad del ganado (32%).

Para intentar un acercamiento algo más fino conviene entonces precisar las diferencias posibles entre las causas de la ciudad y las de la campaña y para ello conviene recurrir a los **Gráficos G y H**. En la ciudad, obviamente, las categorías “Deudas” y “PU” todavía tienen una mayor participación que en el total y como no podía ser de otro modo las categorías “Tierras” y “Ganado” tienen mayor incidencia en la campaña. Sin embargo hay algunos aspectos de la composición de las causas rurales que es interesante destacar. En primer término, que en la campaña también las causas por Deudas ocuparon el primer rango (33%). En segundo lugar, que en ella también podemos registrar una incidencia de los juicios que involucraban propiedades urbanas y sin duda refleja el proceso de crecimiento de los pueblos rurales. En tercer término, los juicios que agrupamos en la categoría “Autoridades” son sugestivos pese a su escaso número: podemos observar que ellos se entablaron en su mayor parte en la campaña y consistieron generalmente en demandas contra Alcaldes de Hermandad y Jueces de Paz por abuso de autoridad, excesos y despojos. Si a ello le agregamos que una parte de los juicios que provienen de la campaña consisten en instancias de apelación ante la Justicia de Primera Instancia de decisiones que aquellas autoridades locales habían adoptado, podemos considerar que para algunos grupos rurales la justicia civil fue un medio para intentar limitar el poder de estas autoridades locales; pero que, dada la extrema desigualdad que presenta el acceso a esta instancia en la campaña ello estuvo al alcance sólo de los vecinos de algunos partidos. Por último, que la incidencia de las causas de Familia tuvieron una proporción muy semejante en ambos espacios lo que nos ofrece una imagen bien distinta de la habitual del mundo rural.

Las categorías en las distintas zonas rurales

La **tabla 7** amplifica la visión sobre la campaña, ya que precisa datos correspondientes a las cinco zonas que hemos discriminado y aplicamos a las mismas las diez categorías tomando en consideración los 1265 juicios civiles registrados. Si consideramos la distribución de cada tipo de causa en las cinco zonas rurales vemos que algunas

²² Aquí incluimos los juicios que no pudimos preciar su causa principal.

categorías tuvieron una ubicación relativa muy semejante en cuatro de las zonas pero diferente en el Sur 1. En las primeras, las causas por Deudas ocupan el primer rango y las de Tierras el segundo; en el Sur 1, en cambio, la primera posición es ocupada por los juicios por Tierras y en una segunda posición muy cercana por las Deudas. Si bien aquí, la categoría Ganado tuvo un rango más destacado, al punto de que es la única zona en la que se situó en tercer lugar, ello no altera el cuadro general. En otros términos, las diferencias entre las zonas fueron mucho más pronunciadas considerando el acceso que cada una tuvo a la justicia civil que a los objetos que ocasionaban los litigios que tienen una notable regularidad dado que presentan variaciones que no son decisivas. Ello sugiere que las diferencias entre regiones y partidos que la serie pone en evidencia provienen sobre todo del desigual grado de institucionalización de la relación de la sociedad con la justicia y de las prácticas sociales efectivas frente al sistema judicial y en cambio, refleja menos las particularidades locales que estaban produciendo las transformaciones económicas. Sin embargo, conviene que las tengamos en cuenta.

La evolución anual de las causas civiles según las categorías generales

El **Gráfico I** nos permite analizar la evolución anual de las cuatro categorías principales que en conjunto representan el 78% de los juicios rurales. Podemos ver con claridad que el brusco ascenso del número de causas rurales producido en la década de 1820 respondió fundamentalmente al incremento de los litigios por Tierras primero y por Deudas después mientras que las otras dos categorías destacadas (Familia y Ganado) ofrecen una tendencia ascendente mucho más tenue. Además, que las causas por Deudas fueron las únicas que siguieron teniendo una tendencia francamente ascendente en los últimos años del período bajo estudio, mientras que los litigios por Tierras vuelven a tener una magnitud semejante a la que tenían al comienzo de la década.

Estas evidencias sugieren que el movimiento de la serie no puede ser explicado sólo en función del impacto de las reformas institucionales o del contexto político, que fue la impresión dominante que nos había dado el análisis de las causas de la campaña sin desagregar su composición temática. Sin duda, estos factores han influido pero ahora podemos postular relaciones algo más precisas con las transformaciones económicas.

Las causas por Deudas terminaron adquiriendo la primacía aunque ella no sea un rasgo de la litigiosidad rural durante todo el período: en rigor sólo adquieren este nivel desde 1828. Si se observa con atención el movimiento de la curva Deudas puede verse que ella crece con oscilaciones desde 1824 y, sobre todo, desde 1827. Es indudable que en ello tiene que haber tenido un papel central el proceso inflacionario y su efecto disruptivo sobre el funcionamiento de la economía, las relaciones sociales y, en especial, sobre los contratos (Irigoin, 2003; Fradkin, 2003). A ello debe haber contribuido también la creciente valorización real y no sólo nominal de los bienes rurales, primero del ganado y luego de la tierra (Garavaglia, 2003a, 2003b). Ello debe estar explicando el peculiar movimiento de la curva de la categoría Tierras que tiene un crecimiento importante entre 1823 y 1826, aunque luego termina por volver a los niveles anteriores. Entre estos años, 1826 parece ser el año más conflictivo. Esta situación tiene relación con la implementación de la ley de enfiteusis que provocó tanto el traspaso de títulos de propiedad, como el establecimiento de un nuevo grupo de propietarios en tierras ya pobladas y sin propietarios firmes y seguros y un notable incremento de las demandas de desalojo (Fradkin y Robles, 2002). En este punto merece destacarse que las leguas escrituradas en el total de la campaña se triplicaron entre 1825 y 1826 y volverán a hacerlo entre 1827 y 1828 (Infesta, 1993), traspasos que justamente tuvieron incidencia decisiva en el Oeste.

Por lo tanto, el aumento de los juicios vinculados a la tierra también puede encontrar su explicación en el incremento sostenido de sus precios que luego de un largo período de estancamiento que llega hasta 1818/1819, comenzaron a subir hasta 1828 (Garavaglia, 2003b) dado que la suba general de los precios de la tierra impulsó a muchos comerciantes y especuladores a adquirir tierras. Pero que estos incrementos no obedecieron sólo a la aplicación de la ley de enfiteusis y a la inflación puede sugerirlo el hecho de que la curva de Tierras se anticipa al resto en cuanto a su incremento insinuando un movimiento que en algunos años a partir de 1819 supera a las Deudas.

Que estas relaciones no pueden postularse mecánicamente lo evidencia la curva de la categoría Ganado que aparece como mucho menos sensible al curso de las transformaciones económicas. Ello, probablemente, se deba al hecho de que no era la justicia civil su ámbito principal de resolución dado que eran generalmente incumbencia de los Jueces de Paz o directamente se tramitaban ante la justicia criminal. Aún así, ciertos momentos especialmente conflictivos parecen reflejarse en nuestra serie como el año 1827 donde encontramos el mayor número de causas por ganado. Aquí la explicación puede encontrarse en las consecuencias del bloqueo del puerto de Buenos Aires entre diciembre de 1825 y agosto de 1828, que acentúa el proceso inflacionario al disminuir las exportaciones provocando una seria contracción de las actividades de los saladeros, pero la situación es particularmente crítica para los pequeños ganaderos.

El crecimiento de las causas vinculadas a cuestiones de Familia, pese a su tercer lugar y relativamente bajo porcentaje (10%) muestra desde otro ángulo la creciente complejidad social de la campaña. Un número máximo de 10 causas por año si bien no nos habilita para postular que las relaciones familiares conflictivas eran mediatizadas por la justicia civil, es sin embargo un indicador de civilidad creciente de la población rural (Moreno, 2000) pues, recordemos que, al menos, tiene la misma proporción que en la ciudad.

Conclusiones

Esta indagación permite efectuar constataciones e identificar problemas más que formular explicaciones. Si tiene algún valor es que nos permite un encuadre más preciso de la representatividad temporal y espacial de estas fuentes y que suministra indicios firmes acerca del funcionamiento efectivo de la justicia dado que existen pocos precedentes como para poder comparar sus resultados. Entre las escasas aproximaciones seriales cuantitativas sobre el ejercicio efectivo de la justicia podemos señalar aquellas que han analizado el período 1830-1852 empleando la evidencia que suministra la justicia de paz (Salvatore, 1997; Garavaglia, 1997). Aunque los períodos considerados son diferentes, la comparación de los resultados muestra una clara diferenciación entre las dos instancias judiciales. Los trabajos de Fabián Alonso (2000) y Nidia Robles (2001) pueden considerarse antecesores directos del estudio que presentamos en esta oportunidad. El primero, examinó el funcionamiento de la justicia criminal durante entre 1756 y 1818 a través del análisis del más extenso de los fondos criminales conservados en el AGN y nos mostró una justicia criminal de un carácter marcadamente urbano, donde predominaban los delitos contra las personas. Es decir que hasta fines de la década 1810 la justicia capitular no sólo era de sede urbana sino que atendía casi exclusivamente la litigiosidad de origen urbano tanto en el plano criminal como en el civil. Por su parte, Robles analizó estas mismas fuentes entre 1825-1834 y remarcó también su carácter urbano. Nuestro análisis, por lo tanto, confirma la misma imagen acerca del funcionamiento efectivo de esta instancia judicial y evidencia que si bien la primacía urbana en la litigiosidad civil muestra una tendencia levemente descendente también que el incremento en el acceso a la justicia de primera instancia por parte de la población rural operado en algunos años de la década de 1820 no llegó a consolidarse.

De este modo, los años del primer rosismo –decisivos en cuanto a la consolidación del estado provincial en el medio rural- evidencian una retracción de los avances logrados en cuanto a canalizar judicialmente los conflictos entre particulares en la campaña. Como vimos, ello parece obedecer no tanto a las decisiones institucionales sino al funcionamiento efectivo de la relación entre población rural y Justicia de Primera Instancia como puso en evidencia que dicha litigiosidad siguió creciendo pese a la decisión de trasladar a la ciudad los jueces en 1824 y luego ella decreció sin que hubiera una decisión de equivalente importancia que pudiera explicarla.

En segundo término, cabe indicar la fuerte diversidad en el acceso a la justicia civil que presentaron las distintas zonas de la campaña y, en particular el reducido papel que esta instancia tuvo tanto para algunas áreas tanto para el norte de la provincia – pese a su mayor antigüedad de asentamiento y la importancia de un pueblo importante que como San Nicolás hasta había adquirido en 1819 el estatuto de ciudad (Canedo, 1999), como para los partidos fronterizos. En consecuencia, ello sugiere que el poder efectivo de los Jueces de Paz debiera ser también diferenciado regionalmente y que ese poder no puede postularse sólo teniendo en cuenta la normativa vigente. Por el contrario, el análisis realizado nos ha mostrado que en la práctica judicial efectiva el poder de estos jueces fue mayor de lo que las normas fijaban y ello fue aún más notables en las áreas mencionadas.

En tercer término, la evidencia analizada nos presenta la existencia de determinadas zonas – y sobre todo, de algunos partidos- que presentarían una mayor tradición litigiosa y un acceso mucho mayor a la justicia que otros de la misma zona. El análisis efectuado puso de manifiesto un complicado proceso de extensión de la “frontera judicial” y sugiere una trama de relaciones crecientemente más compleja entre el estado y la sociedad, aunque este desarrollo estaba lejos de haberse consolidado en este período. El acceso a la justicia letrada no es un aspecto menor en una sociedad que tenía una concepción muy arraigada de la función principal del juez como mediador en los conflictos entre particulares y que debía resolver una cierta dualidad: por un lado, asignaba un rasgo de mayor civilidad al hecho de que la resolución de los conflictos entre particulares se dejaran de efectuar por mano propia y pasaran por el canal mediador de “las justicias”; pero, por otro, solía ver de mal modo la multiplicación de los litigios pues se estimaba que ello afectaba las relaciones entre las familias, de cuya armonía se esperaba encontrar un fundamento más sólido del orden público. El orden civilizado que se pretendía construir en la campaña debía tener una instancia efectiva de mediación y asignaba a “las justicias” esa función primordial. Ahora bien: consideramos que no es un detalle si dicha función recaía casi exclusivamente en la justicia de paz o, en cambio, debía compartirla con la letrada. Los limitados logros obtenidos en que fuera esta última un canal privilegiado para el mundo rural – y aún más, su retroceso en los últimos años del período- nos vuelve a poner frente a la evidencia de las limitaciones que tuvo la penetración efectiva del estado en las profundidades del mundo rural (al menos, por esta vía) y la extrema dependencia que tenía su capacidad de acción de mediaciones sociales (Gelman, 2000). En consecuencia, asistimos a un proceso en el cual se fue conformando lentamente una nueva forma de resolución de los conflictos mediada por el estado que se evidencia en la tendencia al incremento de la litigiosidad judicial rural pero ella no sólo se asentó en prácticas e instituciones preexistentes (por ejemplo, el Cabildo de Luján) sino que además no llegó a consolidarse. De este modo, para el mundo rural al menos, la reforma judicial de 1821 fue mucho menos exitosa de lo que parecía en sus comienzos.

En cuarto lugar, el acceso diferencial de las distintas regiones de la campaña a la justicia civil nos advierte acerca de la necesidad de superar una visión de simple contraposición

entre ciudad y campaña. En lugar de dos situaciones claramente opuestas lo que se nos presenta es un espectro variable de situaciones rurales en la que ha incidido los disímiles efectos de la reforma judicial pero sobre todo el grado de consolidación y complejidad del proceso colonizador. El análisis efectuado de la litigiosidad judicial nos permite ver la extrema dificultad que tuvieron al menos estas estructuras estatales de acompañar el dinamismo que ponía de manifiesto la población rural y su fuerte variación entre zonas que sugiere el despliegue de una “frontera judicial” que tiene una geografía no sólo diferente de la demográfica sino también de la electoral.

Por último, como pudo observarse, la oposición entre ciudad y campo debe también atenuarse si consideramos la composición temática de las causas en ambos ámbitos y excluimos las diferencias que resultan obvias. La proporción equivalente de las categorías Deudas y Familia nos devuelve una imagen de mayor “civilidad” – o, si se prefiere, de mayor “urbanidad”- de los vecinos de la campaña que muchas veces se ha supuesto.

Bibliografía citada

- Alonso, Gustavo Fabián (2000) “La justicia criminal en el período colonial: un acercamiento estadístico (1756-1818)”, ponencia presentada en la RER.
- Barreneche, Osvaldo (2001), *Dentro de la Ley, TODO. La justicia criminal de Buenos Aires en la etapa formativa del sistema penal moderno de la Argentina*, La Plata, Ediciones Al Margen
- Canedo, Mariana (2000), *Propietarios, ocupantes y pobladores. San Nicolás de los Arroyos, 1600-1860*, GIHRR, Facultad de Humanidades, Universidad Nacional de Mar del Plata, Mar del Plata.
- Cansanello, Carlos (2001), “Itinerarios de la ciudadanía en Buenos Aires. La ley de elecciones de 1821”, en *Prohistoria*, N° 5, pp. 143-169.
- Díaz, Benito (1959), *Juzgados de Paz de campaña en la Provincia de Buenos Aires (1821-1854)*, La Plata.
- Fradkin, Raúl (2003), “Los contratos rurales y la transformación de la campaña de Buenos Aires durante la expansión ganadera (1820-1840)”, en FRADKIN, R. y GARAVAGLIA, J.C. (comps.), *En busca de un tiempo perdido. La economía de Buenos Aires en el país de la abundancia, 1750-1865*, Buenos Aires, Prometeolibros, en prensa.
- Fradkin, Raúl, Barral, María E., Perri, Gladys y Alonso, Fabián (2001), “Los vagos de la campaña bonaerense: la construcción histórica de una figura delictiva (1730-1830)”, en *Prohistoria*, N° 5, Rosario, pp. 171-202.
- Fradkin, Raúl y Robles, Nidia (2002), “Juicios de desalojo y formas de resistencia subalterna en la campaña bonaerense durante la década de 1820”, ponencia presentada en las XVIII Jornadas de Historia Económica; AAHE; Mendoza.
- Garavaglia, Juan Carlos (1997), “Paz, orden y trabajo en la campaña: la justicia rural y los juzgados de paz en Buenos Aires, 1830-1852”, en *Desarrollo Económico*, Bs. As., N° 146, pp. 241-262.
- (1999), “Un siglo de estancias en la campaña de Buenos Aires: 1751 a 1853”, en *Hispanic American Historical Review*, 79:4, pp.703-734.
- (2003a), “La propiedad de la tierra en la región pampeana bonaerense: algunos aspectos de su evolución histórica (1730-1863)”, en FRADKIN, R. y GARAVAGLIA, J.C. (comps.), *En busca de un tiempo perdido. La economía de Buenos Aires en el país de la abundancia, 1750-1865*, Buenos Aires, Prometeolibros, en prensa..
- (2003b), “La economía rural de la campaña de Buenos Aires vista a través de sus precios: 1756-1852”, en FRADKIN, R. y GARAVAGLIA, J.C. (comps.), *En busca de un tiempo perdido. La economía de Buenos Aires en el país de la abundancia, 1750-1865*, Buenos Aires, Prometeolibros, en prensa.
- Gelman, Jorge (2000), “Crisis y reconstrucción del orden en la campaña de Buenos Aires. Estado y sociedad en la primera mitad del siglo XIX”, en *Boletín del Instituto de Historia Argentina y Americana Dr. Emilio Ravignani*, 3ª serie, N° 21, pp. 7-32.
- Gelman, Jorge y Santilli, Daniel (2000), “La campaña de Buenos Aires en 1839. Un análisis desde la contribución directa”, ponencia presentada en XVII Jornadas de Historia Económica, Tucumán.
- González Bernaldo, Pilar (1987), “El levantamiento de 1829: el imaginario social y sus implicancias políticas en un conflicto rural”, en *Anuario del IEHS*, N° 2, Tandil, UNCPBA, pp. 135-176.
- Herzog, Tamar (2000), “La vecindad: entre condición formal y negociación continua. Reflexiones en torno de las categorías sociales y las redes personales”, en *Anuario del IEHS*, 15, Tandil, pp. 123-132.

- Ibañez Frocham, Manuel (1938), *La organización judicial argentina (ensayo histórico). Epoca colonial y antecedentes patrios hasta 1853*, Bs. As., La Facultad.
- Infesta, María E. (1993), "La enfiteusis en Buenos Aires (1820-1850)", en Bonaudo y Pucciarelli, A. (comps.): *La problemática agraria. Nuevas aproximaciones*, tomo I, Bs.As., CEAL, 1993, pp. 93-120.
- Irigoin, María Alejandra (2003), "La expansión ganadera en la campaña de Buenos Aires, 1820-1870: ¿una consecuencia de la financiación inflacionaria del déficit fiscal?", en FRADKIN, R. y GARAVAGLIA, J.C. (comps.), *En busca de un tiempo perdido. La economía de Buenos Aires en el país de la abundancia, 1750-1865*, Buenos Aires, Prometeolibros, en prensa.
- Mateo, José (2001), *Población, parentesco y red social en la frontera. Lobos (provincia de Buenos Aires) en el siglo XIX*, Mar del Plata, UNMdP/GIHR.
- Moreno, José Luis (2000), "La Infancia en el Río de la Plata: Ciudad y campaña de Buenos Aires 1780-1860", en *Cuadernos de Historia Regional*; N° 20-21, Luján, UNLu, pp. 125-146.
- Moreno, José Luis y Mateo José (1997), "El 'redescubrimiento' de la demografía histórica en la historia económica y social", en *Anuario del I.E.H.S.*, N° 12, Tandil, pp. 35-56.
- Ratto, Silvia (1996), "Conflictos y armonías en la frontera bonaerense, 1834-1840", en *Entrepasados*, N° 11, pp. 21-34.
- Robles, Nidia (2001) "La Justicia civil en la campaña bonaerense: una aproximación cuantitativa (1825-1834)", en *Prohistoria*, Año V, N° 5, pp. 203-221
- Rosal, Miguel A. y Schmit, Roberto (1999), "Del reformismo colonial borbónico al librecomercio: las exportaciones pecuarias del Río de la Plata (1768-1854)", en *Boletín del Instituto de Historia Argentina y Americana Dr. Emilio Ravignani*, N° 20, pp. 69-110.
- (2003), "Las exportaciones pecuarias bonaerenses y el espacio mercantil rioplatense (1768-1854)", en FRADKIN, R. y GARAVAGLIA, J.C. (comps.), *En busca de un tiempo perdido. La economía de Buenos Aires en el país de la abundancia, 1750-1865*, Buenos Aires, Prometeolibros, en prensa.
- Salvatore, Ricardo (1997), "Los crímenes de los paisanos: una aproximación estadística", en *Anuario del I.E.H.S.*, N° 12, Tandil, pp. 91-100.
- Ternavasio, Marcela (1995), "Nuevo régimen representativo y expansión de la frontera política. Las elecciones del estado de Buenos Aires: 1820-1840", en ANNINO, Antonio. (comp.), *Historia de las elecciones en Iberoamérica, siglo XIX*, Bs. As., FCE, pp. 65-106.
- Zorroaquín Becú, Ricardo (1952), *La organización judicial argentina en el período hispánico*, Bs. As., Librería del Plata.

Tabla 1. Distribución anual del número de causas (Total, ciudad y campaña)

Año	Total de Causas	Ciudad		Campaña		Sin datos lugar	
		N°	%	N°	%	N°	%
1800	57	42	74	13	23	2	4
1801	45	33	73	12	27	0	0
1802	74	63	85	11	15	0	0
1803	74	62	84	9	12	3	4
1804	47	35	74	12	26	0	0
1805	56	46	82	9	16	1	2
1806	51	46	90	5	10	0	0
1807	42	36	86	4	10	2	5
1808	52	41	79	11	21	0	0
1809	62	49	79	10	16	3	5
1810	77	54	70	20	26	3	4
1811	83	60	72	21	25	2	2
1812	51	38	75	12	24	1	2
1813	40	30	75	10	25	0	0
1814	51	34	67	15	29	2	4
1815	54	40	74	13	24	1	2
1816	78	53	68	19	24	6	8
1817	66	50	76	15	23	1	2
1818	110	84	76	26	24	0	0
1819	95	73	77	21	22	1	1
1820	86	68	79	17	20	1	1
1821	146	104	71	36	25	6	4
1822	196	146	74	47	24	3	2
1823	218	165	76	46	21	7	3
1824	241	168	70	69	29	4	2
1825	245	151	62	90	37	4	2
1826	234	144	62	88	38	2	1
1827	231	144	62	86	37	1	0
1828	310	204	66	103	33	3	1
1829	253	199	79	50	20	4	2
1830	300	219	73	80	27	1	0
1831	260	200	77	60	23	0	0
1832	281	215	77	66	23	0	0
1833	299	233	78	63	21	3	1
1834	331	238	72	93	28	0	0
TOTAL	4896	3567	73	1262	26	67	1

Fuente: Elaboración propia a partir de AGN-Tribunal Civil, Letras A-Z, 1800-1834.

Tabla 2. Distribución del número de causas en la campaña

	CERCANA	SUR 1	SUR 2	NORTE	OESTE	TOTAL
Causas	449	256	40	161	359	1265
%	36	20	3	13	28	100

Tabla 3: Distribución de la población y los juicios por zona y quinquenio

Zona	1810-1814		1820-1824		1830-1834	
	% Población	% Causas	% Población	% Causas	% Población	% Causas
Norte	21,82	15,28	23,53	13,27	18,46	11,85
Oeste	34,50	27,78	29,80	44,55	27,97	25,90
Cercana	23,92	40,28	20,20	22,27	22,85	38,02
Sur 1	19,44	16,66	23,00	19,91	18,67	18,18
Sur 2	0,32	0,00	3,47	0,00	12,05	6,05

Tabla 4. Distribución Regional en 2 etapas.

REGION	1° ETAPA (1800-1815)		2° ETAPA (1816-1834)	
	N°	%	N°	%
CIUDAD	715	79	2851	73
CAMPAÑA CERCANA	84	9	364	9
CAMPAÑA INTERMEDIA	88	10	671	17
FRONTERA	16	2	40	1
TOTAL	903	100	3926	100

Tabla 5. Distribución por partido. Total y en 2 etapas.

Zona	Partidos en 1838	Total	% en la región	% del total	Total 1° Etapa	Total 2° Etapa
Norte	San Nicolás de los Arroyos	48	30	4	10	38
	San Pedro	33	21	3	6	27
	Arrecifes	28	17	2	5	23
	Pergamino	20	12	2	2	18
	Baradero	16	10	1	4	12
	Salto	12	8	1	0	12
	Rojas	4	2	0	1	3
SUBTOTAL		161	100	13	28	133
Oeste	Luján	99	28	8	18	81
	Exaltación de la Cruz	55	15	4	5	50
	San Antonio de Areco	48	14	4	7	41
	Pilar*	46	13	4	6	39
	Lobos	39	11	3	6	33
	Guardia de Luján (con Chivilcoy)	33	9	3	2	31
	Navarro	19	5	2	0	19
	Fortín de Areco*	12	3	1	0	11
	San Andrés de Giles	8	2	1	0	8
SUBTOTAL		359	100	28	44	313
Cercana	Quilmes	110	25	9	7	103
	San Isidro	89	20	7	17	72
	San José de Flores*	65	14	5	8	56
	Morón	62	14	5	12	50
	Las Conchas	38	8	3	20	18
	Matanza	32	7	3	7	25
	San Fernando	32	7	3	1	31
	Ejido	21	5	2	12	9
SUBTOTAL		449	100	36	84	364
Sur 1	Magdalena	74	29	6	18	56
	Chascomús	66	26	5	2	64
	San Vicente	58	23	5	7	51
	Ensenada	19	7	2	1	18
	Monte	17	7	1	2	15
	Cañuelas	11	4	1	0	11
	Ranchos	11	4	1	1	10
SUBTOTAL		256	100	20	31	225
Sur 2	Monsalvo	19	47	2	0	19
	Dolores	17	43	1	0	17
	Tapalque	2	5	0	0	2
	Fuerte Independencia (Tandil)	2	5	0	0	2
	Azul	0	0	0	0	0
	Bahía Blanca	0	0	0	0	0
	Carmen de Patagones	0	0	0	0	0
SUBTOTAL		40	100	3	0	40
TOTAL		1265		100	187	1075

*Un expediente sin fecha

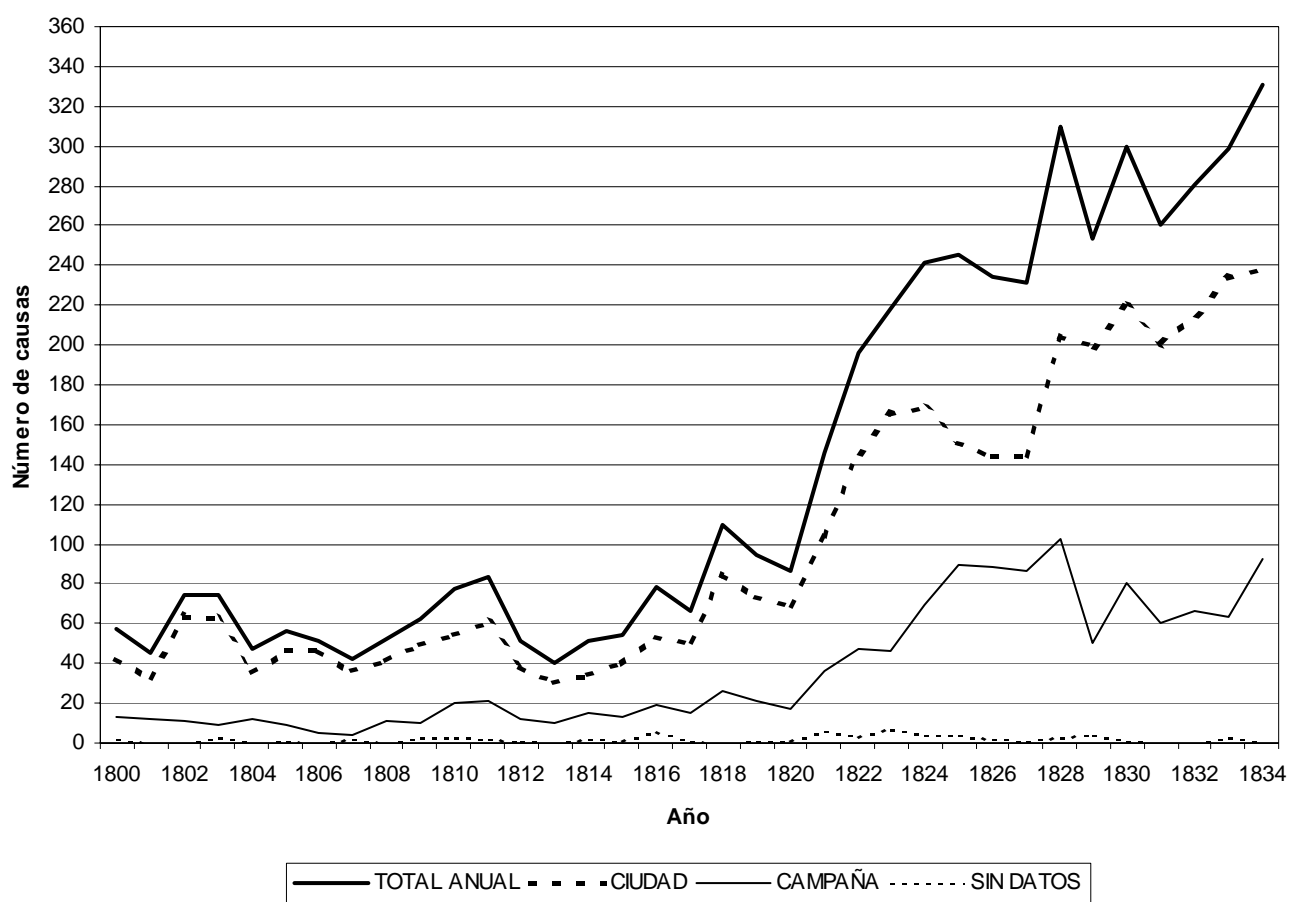
Tabla 6. Distribución del total de causas según categorías generales

Tipo de Causa	Total		Ciudad		Campaña		S/D Lugar	
	Total	%	Total	%	Total	%	Total	%
Deudas	2117	44	1702	47	415	33	35	49
Familia	454	10	344	10	110	9	7	10
Tierras	391	8	22	1	369	29	5	7
Ganado	118	2	27	1	91	7	0	0
Daños	88	2	48	1	40	3	0	0
P.U.	591	12	543	15	48	4	10	14
Autoridades	44	1	11	0	33	2	1	1
Tramitación	591	12	506	14	85	7	8	11
Otros	199	4	163	5	36	3	1	1
S/D Causa	241	5	203	6	38	3	5	7
Total	4834	100	3569	100	1265	100	72	100

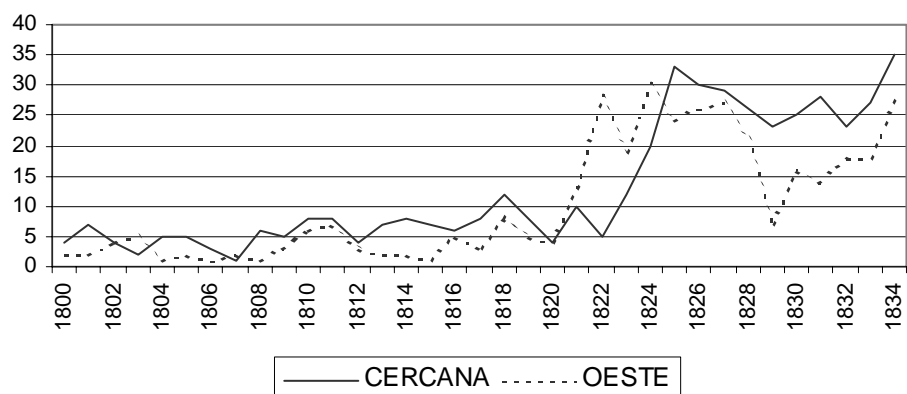
Tabla 7. Distribución regional del tipo de causas.

Tipo de Causa	Total Campaña		Cercana		Oeste		Norte		Sur 1		Sur 2	
	N°	%	N°	%	N°	%	N°	%	N°	%	N°	%
Deudas	415	33	160	36	114	32	53	33	71	28	17	42
Familia	110	9	25	6	35	10	24	15	23	9	3	7
Tierras	369	29	133	30	112	31	38	23	74	29	12	29
Ganado	91	7	23	5	28	8	9	6	29	11	2	5
Daños	40	3	16	4	12	3	0	0	11	4	1	3
P.U.	48	4	22	5	11	3	8	5	6	2	1	3
Autoridades	33	2	11	2	11	3	3	2	7	3	1	3
Tramitación	85	7	27	6	21	6	15	9	21	8	1	3
Otros	36	3	16	3	7	2	6	4	7	3	0	0
SD/Causa	38	3	16	3	8	2	5	3	7	3	2	5
Total	1265	100	449	100	359	100	161	100	256	100	40	100

Gráfico A. Evolución anual del número de causas. Ciudad y Campaña.



**Gráfico B. Evolución anual del número de causas -
Campaña Cercana y Oeste**



**Gráfico C. Evolución anual del número de causas -
Campaña Sur 1, Sur 2 y Norte**

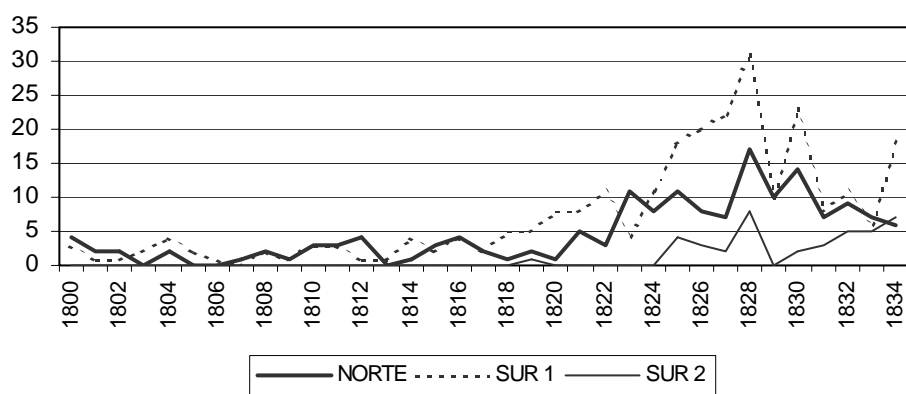


Gráfico D. Evolución del número de causas - Promedios quinquenales.

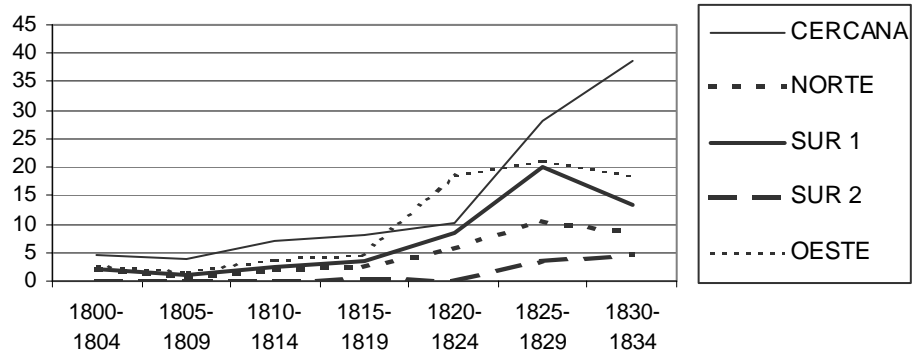


Gráfico E. Distribución Regional en 2 etapas

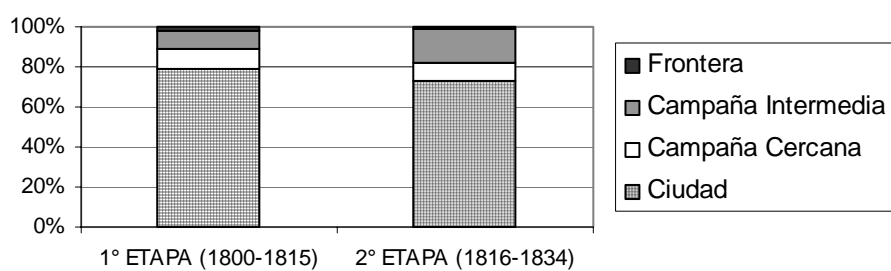


Gráfico F. Distribución total por partidos

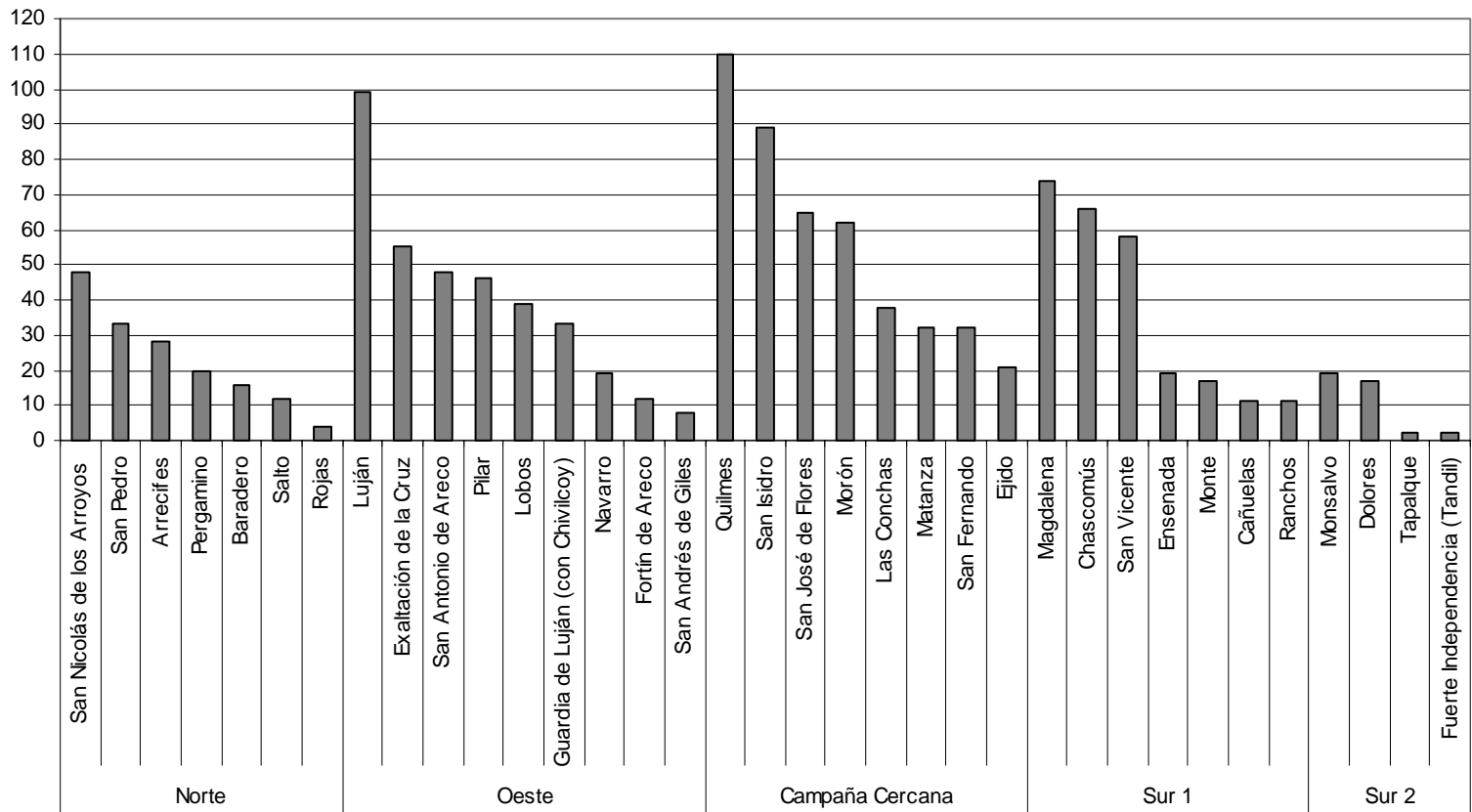
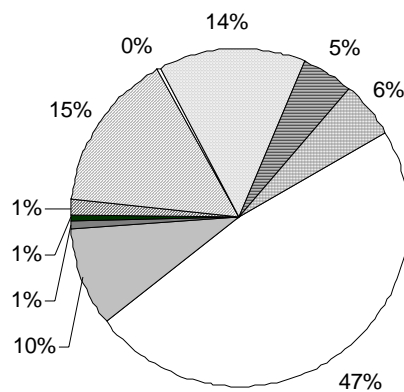
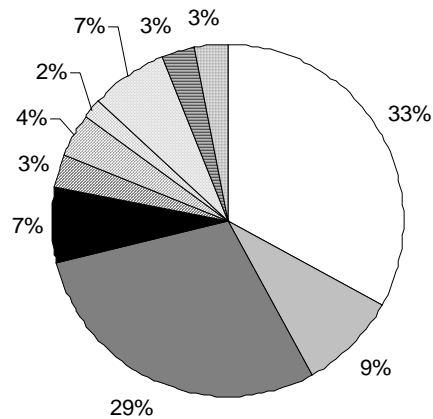


Gráfico G. Distribución por tipo de causa. Ciudad.



- ☐ Deudas
- ☐ Familia
- ☐ Tierras
- ☐ Ganado
- ☐ Daños
- ☐ P.U.
- ☐ Autoridades
- ☐ Tramitación
- ☐ Otros
- ☐ S/D Causa

Gráfico H. Distribución por tipo de causa - Campaña



- ☐ Deudas
- ☐ Familia
- ☐ Tierras
- ☐ Ganado
- ☐ Daños
- ☐ P.U.
- ☐ Autoridades
- ☐ Tramitación
- ☐ Otros
- ☐ S/D Causa

Gráfico I. Evolución anual de las causas por Tierra, Ganado, Deuda y Familia.

